

C.A. de Concepción

Concepción, diez de abril de dos mil veintitrés.

Visto y oídos. -

En esto autos Ruc 22-4-0392295-5, Rit O-416-2022, provenientes del Juzgado del Trabajo de Concepción, comparece el abogado Ramón Domínguez Hidalgo, en favor de la parte demandada ENAP Refinarías S.A y, deduce recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva dictada el 5 de diciembre de 2022, por el juez del Juzgado del Trabajo de Concepción, don Rodrigo Vera García, fundado en la causal de nulidad establecida en el artículo 478 letra f) del Código del Trabajo, la cual deduce como **causal principal**, y por la cual solicita que se invalide la sentencia recurrida, por haber sido ésta dictada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada y, se dicte sentencia de reemplazo, mediante la cual se rechace la demanda de reconocimiento y cobro de la denominada “remuneración variable”, según lo pedido en las letras a, b y c de la demanda de estos autos. Eximiendo a Enap del pago de costas por no haber sido vencida totalmente.

Como **causal subsidiaria** de la anterior, deduce la causal contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo, por cuanto en la dictación de la sentencia se infringieron sustancialmente derechos y garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°3 incisos 1° y 5° de la Constitución Política de la República y, solicita se invalide la sentencia recurrida, y se dicte sentencia de reemplazo, mediante la cual se rechace la demanda de reconocimiento y cobro de la denominada “remuneración variable”, según lo pedido en las letras a, b y c de la demanda de estos autos. Eximiendo a Enap del pago de costas por no haber sido vencida totalmente.

En **subsidio de las causales anteriores**, el recurrente deduce la causal de nulidad contemplada en el artículo 477 inciso 1ero del Código del Trabajo, por cuanto la sentencia se dictó con infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, considerando infringidos los artículos: **1)** los artículos 453 N°1 inciso 7mo, y 3 en relación con el artículo 452 del Código del Trabajo, **2)** los artículos 220 N°2 en relación con el artículo 325 del Código del Trabajo, **3)** el artículo 325 del Código del Trabajo; y, **4)** los



artículos 325 del citado Código del Trabajo en reacción con el artículo 1545 del Código Civil, solicitando que: se invalide la sentencia recurrida, y se dicte sentencia de reemplazo, mediante la cual se rechace la demanda de reconocimiento y cobro de la denominada “remuneración variable”, según lo pedido en las letras a, b y c de la demanda de estos autos, eximiendo a Enap del pago de costas por no haber sido vencida totalmente.

Al Folio 92, se declaró admisible el recurso de nulidad deducido por la demandante de autos, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 480 inciso 5to del Código del Trabajo, el cual fue conocido en audiencia realizada de forma telemática con fecha 22 de marzo de 2023, alegando por la recurrente el abogado Ramón Domiguez Hidalgo, y en contra del citado recurso, el abogado Alonso Grau Navarro, los cuales expusieron sus alegaciones y observaciones a lo planteado por la contraria.

VISTOS, OÍDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que se ha deducido como causal principal del presente recurso de nulidad en contra de la sentencia de fecha 5 de diciembre de 2022 en lo que dice relación con la acción declarativa y de cobro de la denominada “remuneración variable”, contenida en la cláusula vigésimo primera del convenio colectivo de trabajo materia de autos, la contemplada en el **artículo 478 letra f) del Código del Trabajo**, esto es: *“Cuando la sentencia haya sido dictada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada y hubiere sido ello alegado oportunamente en el juicio”*.

Conforme lo que se consigna en el considerando segundo de la sentencia, el recurrente opuso en su escrito de contestación a la demanda la excepción de cosa juzgada respecto de la acción de declaración y cobro del bono variable señalado, con lo cual se cumple el requisito de preparación oportuna de la causal esgrimida por el recurrente.

Que, para fundar la causal contemplada en el artículo 478 letra f) del Código del Trabajo, el recurrente señala que en estos autos, compareció el Sindicato Interempresa de Funcionarios de Enap y SA’S, por sí y en representación de 20 trabajadores que afirma son afiliados a dicho sindicato, los cuales interponen, en primer lugar, una acción de declaración y pago del



denominado”: “remuneración variable” contenida en la cláusula vigésima primera del Convenio Colectivo de Trabajo, que rigió desde el 1 de julio de 2017 hasta el 30 de junio de 2020, por un monto de \$250.519.135 y demás pagos por dicha remuneración que se devenguen en el futuro con sus reajustes e intereses, todo lo cual se desprende de los numerales a) y b) de las peticiones concretas de la demanda de autos, denominada “VI. PARTE PETITORIA”.

Pero es del caso, que en los autos Rit N° O-1185-2020 del mismo Juzgado del Trabajo de Concepción, en la causa también caratulada: “Sindicato de Interempresas de Funcionarios de ENAP y S.A’S Con ENAP Refinerías S.A.”, el mismo sindicato interpuso exactamente la misma acción que dedujo en autos en contra de ENAP Refinerías, vulnerando con ello la autoridad de cosa juzgada emanada de la sentencia definitiva, firme y ejecutoriada, dictada en dichos autos.

El recurrido indica que la excepción de cosa juzgada que opuso a la contestación de la demanda debió prosperar y ser acogida, pues se cumplen los requisitos que el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil exige para su procedencia, esto es la identidad legal de personas, la identidad de la cosa pedida, y la identidad de la causa de pedir. Así, en el caso de la *identidad legal de personas*, el recurrente manifiesta que tanto en el actual procedimiento laboral, como en los autos Rit O- 1185 -2020 ha sido el mismo actor, esto es el: “Sindicato de Interempresas de Funcionarios de ENAP y S.A ‘S, el cual de acuerdo con el artículo 220 N°2 del Código del Trabajo en relación con el artículo 335 del mismo cuerpo legal, interpuso la misma acción declarativa y de pago del denominado “remuneración variable” contenida en la cláusula vigésima primera del Convenio Colectivo de Trabajo, que rigió desde el 1 de julio de 2017 hasta el 30 de junio de 2020. Además, entre el actual procedimiento y la sentencia de la causa Rit O-1185-2020 existiría la *misma cosa pedida*, pues en ambos casos lo pedido es el reconocimiento del derecho al pago de la remuneración variable, y finalmente existiría, la *misma causa de pedir*, pues en ambas causas se invoca el convenio colectivo de 1° de julio de 2017, la desafiliación de los trabajadores respecto de los cuales acciona el



sindicato demandante y la ultraactividad del artículo 325 del Código del Trabajo.

El recurrente indica que la sentencia impugnada yerra en el fundamento para desechar la excepción de cosa juzgada, por cuanto consideró que el motivo por el cual la sentencia de reemplazo dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones en la causa Rol 375-2021 rechazó la demanda interpuesta en la causa RIT O-1185-2020 del Juzgado del Trabajo, esto es la falta de legitimación activa del sindicato antes individualizado para demandar de conformidad con el artículo 220 N°2 del citado Código, es una cuestión meramente formal, lo que la lleva a sostener que la mencionada sentencia no produciría el efecto de impedir que se pueda volver a discutir el asunto, lo cual en opinión del recurrente es errado, pues indica citando jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema y, al procesalista nacional Alejandro Romero Seguel que la excepción sobre la falta de legitimación es una cuestión de fondo que ataca la acción y, por lo mismo lo que fue resuelto por la Ilustrísima Corte de Apelaciones en la causa Rol 375-2021 sería una excepción perentoria, razón por la cual esta produciría los efectos de que el asunto referido al reconocimiento del derecho y pago del bono variable no pueda volver a ser discutido.

Que, en la audiencia en donde se conoció el presente recurso, el letrado Domínguez Hidalgo ratifica lo antes señalado a efectos que se acoja el presente recurso. Alegó en contra del recurso el abogado Alonso Grau Navarro, quien sostuvo que en la especie no se da la triple identidad exigida por el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, en especial la identidad legal de persona, y los elementos objetivos sobre cosa y causa de pedir. Por otra parte indica que no se debía perder de vista que el que fundamento de esta institución es evitar la dictación de sentencias contradictorias, lo que en la especie en su concepto no podría ocurrir, pues al haberse anulado la sentencia dictada por el Juzgado del Trabajo por parte de la Ilustrísima Corte de Apelaciones en la causa Rol 375-2021, y haber procedido la Corte a dictar sentencia de reemplazo, ésta únicamente se refirió a una cuestión relativa a un requisito de procesabilidad como es la ausencia



de legitimación que tiene el sindicato para comparecer. En razón de aquello, sostiene la parte recurrida que, nunca fue resuelta la cuestión debatida y, por tanto, no existe el peligro de sentencias contradictorias.

SEGUNDO: Para resolver la causal invocada por la recurrente, referente a que la sentencia impugnada ha sido dictada en contra de otra que produce cosa juzgada, se debe analizar si la sentencia de reemplazo dictada por esta Corte en los autos Rol 375-2022, puede ser invocada como excepción de cosa juzgada por ENAP y con ello no volver a discutir lo planteado por el Sindicato demandante, en relación con el reconocimiento al derecho y pago del ya citado “bono variable”, para lo cual es necesario tener en consideración los presupuestos que el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 432 del Código del Trabajo, exige para la procedencia de la excepción de cosa juzgada.

El artículo 177 del Código de Procedimiento Civil dispone: “La excepción de cosa juzgada puede alegarse por el litigante que haya obtenido en el juicio y por todos aquellos a quienes según la ley aprovecha el fallo, siempre que entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta haya:

- 1° Identidad legal de personas;
- 2° Identidad de la cosa pedida; y
- 3° Identidad de la causa de pedir.

Se entiende por causa de pedir el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio.

Como indica la doctrina y la jurisprudencia, lo definitorio de la función jurisdiccional es la resolución de las controversias mediante la aplicación de las normas jurídicas al caso concreto, distinguiéndose de otras forma de resolver los conflictos, por cuanto lo decidido por el órgano jurisdiccional tiene el carácter de definitivo e irrevocable, es decir, con valor de cosa juzgada, lo cual es un elemento característico de la labor jurisdiccional, que lo hace distintivo de la función ejecutiva o de gobierno, y la legislativa, así una ley por ejemplo puede ser derogada o modificada, un acto de gobierno dejado sin efectos, en cambio una sentencia luego que se encuentra firme, tiene el carácter de inmutable. Esta inmutabilidad de lo resuelto tiene rango



constitucional (artículo 73, Constitución Política de la República), no pudiendo los órganos estatales modificar lo resuelto, sin que ello provoque la nulidad de dicho acto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 7, inc.2do de la Constitución Política de la República.

Dada la inmutabilidad que tienen las sentencias firmes, y los efectos que producen una vez que adquieren dicho carácter, se debe ser muy estricto a la hora de analizar la concurrencia de los requisitos que el legislador ha exigido para que una sentencia firme produzca acción o excepción de cosa juzgada como señala el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil. En este sentido la doctrina y jurisprudencia han indicado que, examinar si se dan o no los requisitos legales que hacen procedente la cosa juzgada como acción o como excepción no es un asunto meramente formal y de fácil despacho y, por lo tanto el análisis que se haga debe efectuarse teniendo en consideración el fundamento de la institución, que no es otro que no se vuelvan a discutir asuntos que ya fueron resueltos por un órgano jurisdiccional, y que con ello se pueda desvirtuar lo ya decidido por una sentencia firme y/o provocar decisiones contradictoria.

TERCERO: Que respecto del primer requisito para que sea procedente la cosa juzgada, esto es la *identidad legal de personas*, también conocido como límite subjetivo de la cosa juzgada, es necesario determinar los sujetos de derecho a quienes el fallo perjudica o beneficia, siendo la referencia a una identidad de persona en un sentido jurídico procesal, lo que permite limitar a los sujetos de derecho a quienes el fallo perjudica o beneficia (límites subjetivos). Por ello, se habla de *parte*.

Ahora bien, tradicionalmente se define a *la parte* como: “*aquel que pide en propio nombre (o en cuyo nombre se pide) la actuación de una voluntad de la ley aquel frente al cual es pedida*”, siendo necesario diferenciar lo que se entiende por: 1) La *capacidad* para ser parte, 2) *capacidad* procesal y, 3) *jus postulandi* o capacidad técnica.

En este sentido, MOSQUERA y MATURANA (Breves nociones acerca de la Cosa Juzgada. Facultad de Derecho Universidad de Chile. 2005, p. 33), indican que la *capacidad para ser parte* es aquella que habilita a una persona



natural o jurídica para ser demandante en un proceso, y la *capacidad procesal* o "*legitimatío ad procesassum*", es aquella que permite a una persona actuar por sí en un proceso y *ejecutar válidamente* los actos procesales. Esta capacidad se confunde con la capacidad de ejercicio del derecho civil y la regla general es que ambas capacidades coincidan.

Considerando lo anterior, la cosa juzgada tiene como límite subjetivo a los sujetos que son *partes* en ambos procesos (en el anterior, y en que se reclama la cosa juzgada), por ello la calidad de parte en el proceso recae en las personas que revisten el carácter de demandante o demandado, y no en el representante que actúa a su nombre si fuere incapaz y menos en el profesional que la defiende y representa respecto de las pretensiones que persigue satisfacer en él.

Sin perjuicio de lo antes señalado, y como lo sostienen MOSQUEIRA y MATURANA (ya citados), se debe considerar que existen algunos modos de intervención de las personas en el proceso que defieren de la forma normal en que actúa el demandante y demandado en él, pero en donde las personas que las utilizan revisten el carácter de sujetos de la relación procesal al igual que estos, tal como ocurre con la "*sustitución procesal*", concepto que como indican estos autores, fue utilizado por *Chiovenda* para designar aquellos casos en que una persona comparece en juicio a nombre propio por un derecho ajeno, y que en nuestro país ALEJANDRO ROMERO SEGUEL (Curso de Derecho Procesal Civil, Tomo 1. Ed Jurídica de Chile, p. 100) denomina como casos de *legitimación extraordinaria*, indicando dicho autor que esta institución supone una marcada atenuación a la regla general, que presupone que el ejercicio de la acción solo corresponde a los *titulares legitimados* para instar por la protección del derecho o interés legítimo, requiriendo siempre una habilitación expresa de parte del legislador.

El Código de Procedimiento Civil no contempla de un modo expreso casos de sustitución, pero si se reconocen algunos casos en leyes sustantiva que la regulan, tal como lo reconoció la sentencia de esta Corte en la ya citada Rol N° 375-2021 respecto del caso del artículo 220 N°2 del Código del Trabajo



en el caso de los sindicatos que, al igual como el caso de autos, será procedente cuando se dan lo supuesto del artículo 220 N°2 del Código del Trabajo.

CUARTO: En la especie, no ha existido discusión en cuanto a que la demandada invoca para justificar la excepción de cosa juzgada, el hecho que en la causa Rit O-1185-2020 del Juzgado del Trabajo de Concepción, compareció el Sindicato Interempresas de Funcionarios de Enap y SAS, representado por su directorio compuesto por Rodrigo Cifuentes del Solar, Luis Azocar Santander y Patricio Gómez Montenegro, Presidente, Tesorero y Secretario, respectivamente, en representación de sus asociados, quienes deducen demanda por cobro de prestaciones laborales con ocasión del término del Convenio Colectivo en contra de la empresa Enap Refinerías S.A., representada por Andrés Roccatagliata, solicitando que se declare que la demandada infringió la cláusula vigésimo primera del Convenio Colectivo del que eran parte sus asociados, que tuvo vigencia entre el día **01 de Julio de 2017** y el **30 de Junio de 2020**, y que hoy se incorpora a sus contratos individuales como mandata el **artículo 325** del Código del Trabajo, al no depositar el bono de Renta Variable a los asociados durante el mes de **Julio de 2020**, pretendiendo el cobro del bono devengado en el mes de **julio de 2020** y que se ordene que dicho beneficio sea pagado sucesivamente cada trimestre, como esta' estipulado, más los reajustes e intereses del artículo 63 del Código del Trabajo, demanda que fue acogida por el Juzgado de Trabajo de Concepción.

Tampoco ha sido debatido, que en virtud del recurso de nulidad que dedujo ENAP Refinerías en contra de la sentencia dictada por el Juzgado del Trabajo de Concepción en la causa Rit O - 1185-2020 con fecha 15 de junio de 2021, la Corte de Apelaciones de Concepción, en los autos Rol 375-2021, conociendo del recurso, anulo la citada sentencia, por cuanto esta no cumplió con el requisito establecido en el artículo 459 N°6 del Código del Trabajo, configurándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 478 letra e) del citado Código del Trabajo, dictando esta Ilustrísima Corte de Apelaciones con fecha 14 de diciembre de 2021, sentencia de reemplazo por la cual acogió



la excepción de falta de legitimación activa de la actora y, en consecuencia procedió a rechazar la demanda de los autos Rit O-1185-2020.

QUINTO: Que el considerando sexto de la sentencia impugnada y, la propia sentencia de reemplazo de fecha 14 de diciembre de 2021, invocada por el recurrente para fundar su excepción de cosa juzgada, señala como argumentos para acoger la excepción de falta de legitimación del Sindicato Interempresas de Funcionarios de Enap y SA'S para demandar a la recurrente, el hecho que la actora en los autos Rit O -1185-2020, no pudo acreditar que los trabajadores por quienes accionaba el beneficio del instrumentos colectivo antes citado, eran o habían sido sus asociados, por lo que no habiendo podido acreditar la representación legal que invoca la parte demandante para comparecer en juicio en favor de los trabajadores que indica en su demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 N°2 del Código del Trabajo, se rechazó la demanda.

Que como indicó, el legislador ha permitido que en ciertos casos (excepcionales), acreditándose y concurriendo los *requisitos exigidos por la ley*, pueden comparecer en juicio a nombre propio, ciertas personas (en un sentido legal), instando por la protección de un interés o derecho ajeno.

En la especie y de acuerdo con el considerando sexto de la sentencia impugnada, el Sindicato demandante en los autos Rit O-1185-2020, y lo establecido en la sentencia de reemplazo dictada en los autos Rol 375-2022 *carecía de la representación legal* de los trabajadores a favor de los cuales se reclama el beneficio del instrumento colectivo, pues *no acreditó* que eran efectivamente asociados, y no se probó, tampoco, que la situación reclamada afectaba a la generalidad de sus asociados, lo que impidió que la demanda pudiera prosperar.

Que, entonces es absolutamente claro que la sentencia dictada por esta Corte en los autos Rol 375-2021, que reemplazó a la dictada por el Juzgado del Trabajo en los autos RIT O-1185-2020, la cual fue anulada, y que la recurrente invoca para fundar la excepción de cosa juzgada, no cumple el



primer requisito que esta institución exige, cual es la *identidad legal de persona*, pues el sindicato que compareció en esos autos, reclamando un derecho ajeno, lo hizo sin que se cumplieran los requisitos que el artículo 220 N°2 del Código del Trabajo exige y habilita para permitir una situación enteramente excepcional como es la “sustitución procesal”, pues el Sindicato demandante en esos autos, demandó en favor de sus asociados el reconocimiento y pago de un beneficio contenido en un instrumento colectivo, sin que se cumplieran los requisitos que el legislador exige para que pueda operar legalmente la sustitución procesal, no existiendo legalmente dicha comparecencia en el procedimiento laboral Rit O-1185-2020, por lo que no puede existir identidad legal de persona en los términos que exige el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

SEXTO: Se puede señalar a mayor abundamiento como fundamento para la no concurrencia de identidad legal de personas entre la sentencia de reemplazo dictada en los autos Rol 375-2021 por esta Corte, y la sentencia que se impugna, lo que indica la sentencia de reemplazo dictada con fecha 14 de diciembre de 2021 por esta Corte de Apelaciones, cuando señala: *“Lo esencial y consustancial a esta clase de legitimación es la existencia de una norma legal que expresamente autorice la posibilidad de accionar de tal forma, puesto que constituye una excepción a la regla general que presupone que la acción sólo corresponde a los titulares de los respectivos derechos.*

Por lo tanto, resulta ineludible que quien quiera aprovecharse de esta excepcional clase de legitimación acredite los supuestos de hecho de la norma legal que la contempla, lo que no sucedió en los autos, según se dijo” (Considerando quinto).

Es decir, la propia sentencia que invoca el recurrente para fundar la excepción de cosa juzgada, indica que quien accionó en dicho proceso no se encontraba autorizado para tal efecto, en consecuencia, no puede ser considerado una *“justa parte”*, y por lo mismo no existe identidad legal de persona, lo cual lleva a que se deba rechazar la presente causal del recurso.



SÉPTIMO: Que en subsidio de la causal anterior, el recurrente deduce como causal subsidiaria la contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo, esto es cuando en la dictación de la sentencia definitiva se hubieren infringido sustancialmente derecho o garantías constitucionales. En específico, se denuncia sustancialmente infringidos por el sentenciador el numeral 3 incisos 1 y 5 del artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, pues el recurrente considera que el sentenciador al hacer uso en la sentencia de la facultada establecida en el artículo 453 N°1 inciso 7 del Código del Trabajo, denominada “aceptación tácita de los hechos” vulnera: 1) El inciso 1° del numeral 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República: “La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”, y, 2) El inciso 5° del mismo artículo 19 N°3: “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”.

El recurrente señala que la vulneración de garantías cometida por el Tribunal en la sentencia queda de manifiesto en el considerando undécimo, relativo a la “forma de cálculo o determinación de lo adeudado”, en lo que respecta a la acción de cobro del bono variable contenido en la cláusula vigésimo primera del Convenio Colectivo, señalando que la demandada no habría cuestionado este punto, ya que afirma que la contestación solo contiene “*asertos genéricos*” donde se controvierten todos los hechos de la demanda y que no ha negado los hechos a este respecto, “en forma expresa y concreta”, como lo exigiría el art. 452 del Código del Trabajo. Por lo que, en tal evento, hace uso de la facultad establecida en el art. 453 n.1 inc. 7° del Código del Trabajo, al estimar como tácitamente admitida la alegación del actor sobre cálculo y monto de la remuneración variable.

La recurrente señala que no es efectivo que no se hubiesen controvertido los hechos relativos al cálculo y/o determinación del bono variable, es más cita diversos pasajes de su contestación a la demanda en donde manifiesta la oposición a los hechos contenidos en ella, y por tanto



indica que no es efectivo lo que manifiesta el sentenciador en el considerando undécimo.

Indica que de haber sido efectivo que no se hubieran controvertido los hechos de la demanda en lo relativo al cálculo y/o determinación del bono variable, la citada facultad del juez de estimar tácitamente aceptado los hechos contenidos en la demanda y, que se encuentra establecida en el artículo 453 N°1 inciso 7mo., del Código del Trabajo, debió haberla ejercido el sentenciador en otro momento procesal, esto es, en la audiencia preparatoria, por lo que no habiendo ocurrido aquello precluyó la oportunidad de efectuarlo, y por tanto no podía hacer uso de dicha facultad al momento de dictar la sentencia.

Señala además que el actuar del sentenciador produce una afectación esencial a sus garantías fundamentales, pues declara pacíficos hechos que han sido controvertidos y, en consecuencia aquellos los tiene por acreditados sin mayor o lisa y llanamente ninguna prueba, pese a que fueron fijados como hechos controvertidos por el juez en la respectiva audiencia preparatoria. Para acreditar la infracción el recurrente hace alusión a jurisprudencia y doctrina.

Finalmente, el recurrente pide que acoja el recurso de nulidad por la causal establecida en el art. 477 del Código del Trabajo, por haberse dictado la sentencia definitiva de autos con infracción sustancial de las garantías de derechos constitucionales establecidas en el artículo 19 n.º3 incisos 1º y 5º de la Constitución y, se invalide la sentencia recurrida, y se dicte sentencia de reemplazo, mediante la cual se rechace la demanda de reconocimiento y cobro de la denominada “remuneración variable”, según lo pedido en las letras a, b y c de la demanda de estos autos. Eximiendo a Enap del pago de costas por no haber sido vencida totalmente.

Por su parte, el abogado del Sindicato, alegando en contra del recurso, pide que se rechace la presente causal, manifiesta que el juez hizo uso de sus



facultades conforme lo establecido en el citado artículo 453 N°1 inciso 7mo del Código del Trabajo.

OCTAVO: Que la causal que funda la impugnación, es la contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo, que indica que el recurso de nulidad será procedente “cuando en la dictación de la sentencia definitiva se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías constitucionales”.

Como lo ha establecido la jurisprudencia y la doctrina, el recurso de nulidad es un mecanismo de impugnación extraordinario, destinado a controlar la actividad jurisdiccional de las infracciones de derechos y garantías de carácter sustancial que se produzcan, ya sea en la tramitación del proceso o en la dictación de la sentencia, el cual se ha configurado con causales precisas y determinadas, por lo que para el adecuado examen de la litis planteada, es menester avocarse a dilucidar si la decisión del sentenciador de hacer uso de la facultad contemplada en el artículo 453 N°1 inciso 7 del Código del Trabajo constituye una infracción de las leyes de procedimiento y, si en ese evento éstas han tenido la relevancia y gravedad de afectar el derecho o garantía constitucional al debido proceso que asegura el N° 3 del art. 19 de la Constitución Política de la República.

El inciso 7 del número 1 del artículo 453 del Código del Trabajo dispone: *“Cuando el demandado no contestare la demanda, o de hacerlo no negare en ella algunos de los hechos contenidos en la demanda, el juez, en la sentencia definitiva, podrá estimarlos como tácitamente admitidos”*.

De la simple lectura de la norma queda en claro que estamos frente a una facultad del sentenciador que como indica la propia doctrina que invocó en su alegato el recurrente, esto es, el artículo titulado *“La admisión tácita de los hechos por no contestación de la demanda en el proceso laboral”* del autor Raúl Fernández Toledo, puede ser ejercida por el juzgador de manera racional, conforme con el mérito del proceso.

Que en el considerando undécimo, el sentenciador señala los motivos por los cuales ejerció esta facultad, indicando que para determinar la forma de cálculo o determinación de lo adeudado, tuvo en consideración los hechos que conforme la facultad que se le concede en el artículo 453 N°1 inciso 7 del



Código del Trabajo, se pueden dar por tácitamente aceptados, indicando además el sentenciador que para dar por acreditado tal forma de cálculo, consideró también las liquidaciones de remuneraciones incorporadas a juicio, en especial indica la de julio de 2019, así como el mismo convenio colectivo, por lo que el recurrente, más que cuestionar la procedencia y oportunidad con la cual el juzgador ejerció la facultad contemplada en el artículo 453 N°1 inciso 7 del Código del Trabajo referida a la admisión tácita de los hechos de la demanda, lo que más bien plantea, es discutir si la prueba rendida era suficiente o no para tener por acreditado los hechos referidos a la forma o determinación de cálculo de lo demandado, lo cual no configura la causal pretendida, sino otra, y siendo este recurso de carácter extraordinario y de derecho estricto, debe ser rechazada la causal invocada .

NOVENO: Que a mayor abundamiento y, para rechazar la causal esgrimida, se debe tener en consideración que el recurrente no ha señalado que aspecto del debido proceso invocado como garantía infringida ha sido vulnerada por el sentenciador en la dictación de la sentencia, tan solo se describe en el recurso el ejercicio por parte del juzgador de una facultad que el recurrente cuestiona en cuanto al momento en que habría sido ejercida, pero sin indicar como aquello afecta alguno de los aspectos del debido proceso, el cual como sabemos no se encuentra definido por nuestro sistema de garantías constitucionales, pero que sin embargo, se ha establecido por nuestra jurisprudencia, que éste se compone de un cúmulo de garantías mínimas que deben ser respetadas en cualquier proceso judicial que se precie de tal, como sería el caso del derecho a ser oído, el derecho al acceso y presentación de pruebas, el derecho a la defensa, entre otros, sin que en la especie se indique en forma precisa cual de estos aspectos sería el infraccionado, lo que necesariamente conlleva el rechazo de la causal.

DÉCIMO: Que como tercera causal de nulidad, el recurrente invoca en subsidio de las anteriores la causal establecida en el artículo 477 del Código del Trabajo, la cual concurre cuando la sentencia se hubiere dictado con *infracción de ley* que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.



Indica el recurrente que la sentencia impugnada contiene los siguientes infracciones de ley que han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo: **1)** Infracción a lo establecido en el artículo 453 n°1 y n.3 en relación con el artículo 452 del Código del Trabajo, **2)** La sentencia infringe lo establecido en el artículo 220 n°2 del Código del Trabajo en relación con el artículo 325 del mismo Código, al resolver erradamente la excepción de falta de legitimación activa del Sindicato demandante. **3)** Errada aplicación del artículo 325 del mismo cuerpo legal, y finalmente **4)** La sentencia infringe el artículo 1545 del Código Civil en relación con el artículo 325 del Código del Trabajo. Nada dice el recurrente si los motivos que configuran las infracciones legales antes señaladas, se deducen de manera subsidiariamente o en forma conjunta, para configurar la causal de nulidad del artículo 477 del Código del Trabajo.

El recurrente en cuanto a esta causal, pide que se acoja el recurso de nulidad por la causal establecida en el art. 477 del Código del Trabajo, por haberse dictado la sentencia definitiva de autos con infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, se invalide la sentencia recurrida, y se dicte sentencia de reemplazo, mediante la cual se rechace la demanda de reconocimiento y cobro de la denominada “remuneración variable”, según lo pedido en las letras a, b y c de la demanda de estos autos. Eximiendo a ENAP del pago de costas por no haber sido vencida totalmente.

En la audiencia en que se conoció el presente recurso, el recurrente ratificó y profundizó los argumentos esgrimidos, y el abogado que alegó en contra del recurso solicitó el rechazo del mismo indicando que no se configuran las infracciones reclamadas por el recurrente, toda vez que tal como lo manifestó respecto de la causal antes esgrimida, en el caso de la infracción relativa al ejercicio por parte del Juez de la facultad contemplada en el artículo 453 N°1 inciso 7 del Código del Trabajo, esta se trata de una potestad que el sentenciador puede ejercer configurándose los presupuestos para ello. Por otra parte en el caso de la infracción del artículo 220 N°2 del Código del Trabajo, el abogado del sindicato demandante indicó que la causal invocada no es procedente pues esta no podría acogerse sin que no sea necesario modificar los hechos asentados por el sentenciador en especial el



documento en que fundan su comparecencia, y finalmente en el caso de las dos últimas infracciones, el abogado Grau Navarro sostiene que la interpretación que efectúa el sentenciador se ajusta al texto de la ley, la que debe ser en sintonía con los derechos laborales que la ley garantiza a los trabajadores. Termina en consecuencia, solicitando el rechazo del recurso, declarándose que la sentencia no es nula, condenado en costas al recurrente.

UNDÉCIMO: Que respecto de la primera infracción de ley relativa a la infracción del artículo 453 N°1 inciso 7 del Código del Trabajo, el recurrente reclama que el sentenciador ejerció dicha facultad legal relativa a la aceptación tácita de los hechos contenidos en la demanda, para el caso que estos no fueran controvertidos, que dicha facultad legal fue ejercida por el sentenciador de manera extemporánea y en contravención a los presupuestos que dicha norma señala.

La segunda infracción legal, dice relación con el artículo 220 N°2 del Código del Trabajo, norma que permite al Sindicato demandante, representar a los trabajadores en el ejercicio de los derechos emanados de los contratos individuales de trabajo, cuando sean requeridos por los asociados, no siendo necesario el requerimiento de los afectados para que los representen en el ejercicio de los derechos emanados de los instrumentos colectivos de trabajo y cuando se reclame de las infracciones legales o contractuales que afecten a la generalidad de sus socios.

Se impugna el fallo, pues el recurrente estima que el Sindicato demandante carecía de legitimación activa para representar a los trabajadores respecto de los cuales se cobra el bono variable, pues este emana de un convenio colectivo, debiendo acreditarse que este afecta a la generalidad de los socios del Sindicato. Conforme aquello indica ENAP, la actora debe probar que los trabajadores supuestamente representados están afiliados al sindicato, y que si han requerido al Sindicato, que dicho requerimiento se refiera a las acciones y materias propias del juicio, lo cual indica el abogado de la recurrente no ocurrió, por lo que la acción ejercida por el Sindicato demandante, fue ejercida por un sustituto carente de representación legal, invocando para ello el fallo Rol 375-2022 de esta Corte.



Que no es un hecho discutido, que la recurrente opuso la excepción de falta de legitimación activa del Sindicato demandante en la contestación de la demanda.

Las dos últimas infracciones se analizarán a continuación de las que ya se han señalado.

DUODÉCIMO: Para resolver las cuestiones planteada, se debe indicar que la causal contemplada en el citado artículo 477 del Código del Trabajo se encuentra limitada a *infracciones de ley*, por lo que es mucho más restringidas que las causales de infracción de derecho que se contemplan en otros cuerpos legales, como la causal de nulidad establecida en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal. En dicho orden de ideas y, como reiteradamente se ha sostenido por la doctrina y jurisprudencia, la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, sobre infracción de ley, tiene como finalidad velar porque la ley sea correctamente *aplicada a los hechos o al caso concreto* determinado en la sentencia. En otras palabras, su propósito esencial está en *fixar el significado, alcance y sentido de las normas, en función de los hechos que se han tenido por probados*.

Que lo que se hace a través de la infracción de ley como causal de nulidad, es la confrontación de la sentencia con la ley llamada a regular el caso, lo que supone fidelidad a los hechos probados en la sentencia, pues lo que se ha de examinar en casos como el de autos, es si tales hechos encuadran en el supuesto legal respectivo. En definitiva, para poder examinar el juzgamiento jurídico del caso resulta menester que los hechos a partir de los que se estructura la impugnación se encuentren fijados en la sentencia, pues solo de cumplirse tal exigencia se podrá generar el debate sobre la infracción de ley que se denuncia.

En la especie, lo que se está impugnado como *infracción de ley* no es el encuadre de los hechos probados en una determinada norma legal para así acceder o no a una determinada pretensión, sino que lo que se está impugnado es una supuesta infracción a las normas que regulan el procedimiento laboral, tanto en cuanto a los requisitos para tener legitimación para actuar a nombre propio alegando un interés ajeno, y en el



otro caso, respecto del ejercicio de una facultad de carácter probatorio por parte de juez, todo lo cual no configura la causal de impugnación que se está haciendo valer por parte de la empresa demandada, por lo que debe descartarse las infracciones de ley, en los términos que establece la causal de nulidad contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo.

Finalmente, en el caso de la falta de legitimación activa del Sindicato demandante, se debe descartar la existencia de infracción de ley en los términos que indica el artículo 477 del Código del Trabajo, pues ello implicaría alterar la conclusión fáctica a la cual llega el tribunal en el considerando séptimo, cuando alude al acta de acuerdo y autorización de 15 de noviembre de 2020, lo cual se encuentra vedado para este tribunal, pues según este documento comparecen la totalidad de los trabajadores representados y *“autorizan expresamente a la directiva del sindicato para que los represente ante los tribunales del trabajo y demanda en su nombre a la empresa para que pague todos y cada uno de los beneficios contenidos en el último contrato colectivo a que estuvieron afectos, beneficios que se han incorporado a sus contratos individuales por el solo ministerio de la ley”*.

Conforme a todo lo que se ha venido analizando se descarta que la sentencia impugnada hubiese incurrido en infracción de ley en los supuestos antes indicados.

DÉCIMO TERCERO: Una tercera infracción de ley que denuncia el recurrente, sería la errada aplicación del artículo 325 del Código del Trabajo que efectúa el tribunal, en lo referente a la ejecución o cumplimiento del ya referido bono variable, el cual quedaría excluido de la excepción de ultraactividad que contempla el citado artículo 325 del Código del Trabajo que dispone: *“Extinguido el instrumento colectivo, sus cláusulas subsistirán como integrantes de los contratos individuales de los respectivos trabajadores afectos, salvo las que se refieren a la reajustabilidad pactada tanto de las remuneraciones como de los demás beneficios convenidos en dinero, los incrementos reales pactados, así como los derechos y obligaciones que sólo pueden ejercerse o cumplirse colectivamente y los pactos sobre condiciones especiales de trabajo”*.



El recurrente plantea que son hechos indubitados del juicios el que los trabajadores demandantes se desafiliaron del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional del Petroleo-Petrox S.A, en julio de 2018. Que, por otra parte, el convenio colectivo en el que se contenía el denominado “bono variable” que se demanda termino’ su vigencia el 20 de junio de 2020 y, finalmente, el recurrente señala que los indicadores necesarios para calcular el beneficio denominado bono variable son fruto del esfuerzo colectivo y no individual, por lo tanto, no se pueden calcular en forma individual, quedando de esa manera exceptuados de la ultraactividad contemplada en el artículo 325 del Código del Trabajo.

Sin perjuicio de lo antes indicado, el fallo, con infracción al artículo 325 del citado Código del Trabajo, sostiene que dichos indicadores colectivos solo dicen relación con *el devengamiento del bono*, pero que no obsta a su *cumplimiento individual*, por lo que no se trata de una cláusula que exceptúe la ultraactividad, pues al incorporarse al contrato individual, cada trabajador puede exigir su cumplimiento.

Para el recurrente el fundamento dado por el tribunal, el cual sitúa la exclusión de la excepción a la ultraactividad en la forma de ejecución o pago del llamado bono variable y, no en los cumplimientos de los parámetros para su pago, es absolutamente errado. Señala que lo resuelto por el sentenciador es contrario a lo resuelto por diversos dictámenes de la Dirección del Trabajo y fallos de los Tribunales de justicia.

Por su parte la parte recurrida, indica que el reconocimiento y pago del llamado bono variable contenido en la cláusula 21 del convenio colectivo queda comprendida en el efecto ultraactividad del convenio, pues esta cláusula se ha incorporado al contrato individual, con lo que cada trabajador puede demandar su cumplimiento, por lo que no puede quedar comprendido en la excepción contenida en el artículo 325 del Código del Trabajo, razón por la cual no se configura una errada infracción de ley en este punto.



DÉCIMO CUARTO: Que la causal establecida en el artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, que la sentencia definitiva se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, se configurara' cuando la ley en cuestión se ha aplicado a casos no regulados por la misma; cuando no se ha aplicado a los casos regulados específicamente por ella o cuando, habiéndose aplicado, no lo ha sido en la forma correcta.

Para resolver si ha existido infracción de ley en la aplicación del artículo 325 del Código del Trabajo, conforme lo plantea la recurrente es necesario tener presente que en la especie no existe controversia en lo siguiente: **1)** Con fecha 30 de marzo de 2017, el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional del Petróleo-Petrox S.A. y la empresa demandada, celebraron un convenio colectivo, **2)** que de aquel sindicato formaron parte los trabajadores demandantes, los cuales renunciaron a dicho sindicato con fecha 4 de julio de 2018, constituyendo una nueva organización sindical, que corresponde al Sindicato demandante: Sindicato Interempresas de Funcionarios de Enap SAS, y, **3)** que este convenio tuvo vigencia entre el **01 de julio de 2017 al 30 de junio de 2020**, fecha esta última en que expiro', por lo que desde aquella fecha sus relaciones laborales han estado regidas por sus contratos individuales de trabajo.

Que el asunto controvertido que plantea la recurrente entonces se reduce a determinar si conforme al citado artículo 325 del Código del Trabajo, se puede entender que la cláusula vigésimo primera del convenio colectivo cuya vigencia terminó el 30 de julio de 2020, se entiende incorporada a los contratos de trabajo de los trabajadores pertenecientes al sindicato demandante, y por tanto que desde aquella fecha los trabajadores tienen derecho a que se les reconozca y pague el "bono de remuneración variable" contenido en dicha cláusula, o si por el contrario dicho "bono de remuneración variable" queda comprendido en las excepciones a la ultraactividad que contempla el artículo 325 del Código del Trabajo, y en específico a aquella que dice relación con los derechos y obligaciones que sólo pueden ejercerse o cumplirse colectivamente.



El artículo 325 del Código del Trabajo establece: *“Ultra actividad de un instrumento colectivo. Extinguido el instrumento colectivo, sus cláusulas subsistirán como integrantes de los contratos individuales de los respectivos trabajadores afectos, salvo las que se refieren a la reajustabilidad pactada tanto de las remuneraciones como de los demás beneficios convenidos en dinero, los incrementos reales pactados, así como los derechos y obligaciones que sólo pueden ejercerse o cumplirse colectivamente y los pactos sobre condiciones especiales de trabajo.”*

Que para determinar si el referido bono variable se entiende incorporado a los contratos individuales, y por tanto los trabajadores tienen derecho a su pago con posterioridad al 30 de junio de 2020, es conveniente tener en consideración la Cláusula Vigésima Primera del convenio colectivo, en que se hace referencia al derecho a **“Remuneraciones Variables”** en el siguiente sentido: *“1.- Objetivo: Las partes asignan la mayor importancia a la motivación de los trabajadores afectos al presente contrato en pro de una contribución cada vez más activa en el aseguramiento de agregación real de valor al resultado del negocio. 2.- Constitución de fondo: Con esta finalidad se acuerda conformar un sistema de remuneración variable que se generará en base a indicadores orientados al aseguramiento de agregación real de valor al negocio”, que se liquidará trimestralmente a partir del mes de Julio de 2017 y hasta el mes de abril de 2020”. Luego agrega que. “El rango del incentivo, para cada periodo trimestral, podrá variar entre 10 y 35 días de sueldo base, más bonificación de turno, más bonificación de mantención, más bonificación de construcción, más turno fijo y más mantención fijo de cada trabajador, más 0.30 UTM por cada día de incentivo obtenido dependiendo del comportamiento de los indicadores, partidas todas en sus valores vigentes en el mes del respectivo pago”*

DÉCIMO QUINTO: Para determinar si efectivamente la citada cláusula vigésima primera del convenio colectivo, referente al bono de remuneración variable, se encuentra comprendida en la excepción contemplada en el artículo 325 del Código del Trabajo en lo referente a *los derechos y obligaciones que sólo pueden ejercerse o cumplirse colectivamente* y, por tanto no incorporada a los contratos individuales de los trabajadores a partir del cese de vigencia del convenio colectivo el día 30 de junio de 2020,



configurando una infracción de ley en los términos del artículo 477 del Código del Trabajo, es necesario analizar el fundamento y origen de la ultraactividad de las cláusulas del convenio colectivo, establecido en el citado artículo 325.

La ultraactividad de las cláusulas de los convenios colectivos tiene su origen en nuestra legislación en el decreto ley N°2.759 de fecha 6 de julio de 1979, el cual en su artículo primero, reemplazó el inciso tercero del artículo 6° del decreto ley N° 2.200, de 1978, y agregó 4 nuevos incisos, entre los que destaca aquello referido a los contratos colectivos, señalando lo siguiente: *“Extinguido el contrato colectivo, sus cláusulas subsistirán como integrantes de los contratos individuales de los respectivos trabajadores, salvo aquellas que se refieren a derechos y obligaciones que sólo pueden ejercerse o cumplirse colectivamente”*. Como indica OGALDE MUÑOZ, Jorge (*Ultraactividad del instrumentos colectivo en la reforma laboral*, 2015 p.53), esta norma modifica el artículo 6 del D.L. N° 2.200 introduciendo importantes modificaciones a la normativa sobre negociación colectiva a propósito del concepto de contrato colectivo, contemplando “la subsistencia de las cláusulas colectivas como integrantes de los contratos individuales de los respectivos trabajadores, con la excepción de las que se refieren a derechos y obligaciones que sólo puedan ejercerse o cumplirse colectivamente”.

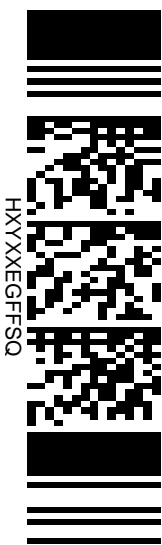
El sentido central que tuvo esta norma que contemplaba la ultraactividad, la cual no excluía de ella a “la reajustabilidad de remuneraciones pactadas y demás beneficios pactados en dinero”, era que quienes negociaban colectivamente no perdieran ningún beneficio al enfrentarse a una nueva negociación (o se mantenían o ganaban algo), pues de lo contrario los sindicatos perderían al negociar colectivamente. Pero esta idea original no sobrevivió la gran crisis económica de 1982 y, por eso a fines de este año, específicamente el 31 de diciembre de 1982 se dicta la ley 18.198, la cual excluyó la reajustabilidad tanto de las remuneraciones como demás beneficios pactados en dinero de la ultraactividad de los convenios colectivos, quedando la norma conforme al siguiente tenor: *“Extinguido el contrato colectivo, sus cláusulas subsistirán como integrantes de los contratos individuales de*



los respectivos trabajadores, salvo las que se refieren a la reajustabilidad tanto de las remuneraciones como de los demás beneficios pactados en dinero, y a los derechos y obligaciones que sólo pueden ejercerse o cumplirse colectivamente". Por tanto, en todo aquello que es ajeno a la reajustabilidad pactada y, demás beneficios en dinero, la idea que se mantiene hasta ahora (ley 19.069, y 20.940) salvo excepciones, ha sido no perder nada de lo ganado, sea que esto se reclame en el piso de negociaciones colectivas futuras o en la norma de la ultraactividad cuando los trabajadores se desafilian y dejan de negociar colectivamente, de aquí que la interpretación de la excepción que atañe a la ultraactividad relativa a los derechos y obligaciones que solo pueden ejercerse o cumplirse colectivamente deba interpretarse restrictivamente.

En este sentido la doctrina (GAMONAL CONTRERAS, Sergio, Derecho Colectivo del Trabajo. P. 319) ha indicado que: "En cuanto a la excepción relativa a los derechos y obligaciones que sólo pueden ejercerse o cumplirse colectivamente, la Dirección del Trabajo ha señalado que son los que deben ser disfrutados o exigidos por todos los dependientes a un mismo tiempo sin que sea viable a ninguno de ellos demandar separadamente su cumplimiento, en un lugar y tiempo diverso del resto, como sucede en el paseo de fin de año, la comida de aniversario y la fiesta de Navidad", lo que no ocurre en la especie, pues una vez cumplido los parámetros para el pago del llamado bono variable contenido en la cláusula vigésimo primera, cada trabajador puede demandar ya sea individual o colectivamente su pago.

DÉCIMO SEXTO: Que el bono de remuneración variable, tal como fue estipulado, **no puede ser estimado** como un beneficio u obligación que sólo puede ejercerse o cumplirse colectivamente, ya que es perfectamente posible que un trabajador al cual no se le haya cancelado dicho bono pueda demandar individualmente al empleador, solicitando el pago del mismo, siendo inocuo que para el cálculo del beneficio en cuestión se haga referencia a elementos que supongan la contribución del trabajo de varios, pues lo trascendentes será que el trabajador, puede impetrar este beneficio colectivamente o individualmente, por lo cual la cláusula vigésimo primera del convenio colectivo que establece el bono de remuneración variable se debe entender incorporado a los contratos individuales de trabajo y, por



tanto, no comprendida en las excepciones a la ultra actividad que contempla el artículo 325 del Código del trabajo.

Que, en consecuencia, se concuerda con lo concluido por el Juez a quo, en el sentido que en el presente caso ha operado la ultra actividad del convenio colectivo, no verificándose la alegación del recurrente, y por tanto no se configura la infracción de ley reclamada de conformidad con lo señalado en el artículo 477 en relación con el artículo 325 del Código del Trabajo.

DÉCIMO SÉPTIMO: Finalmente, el recurrente denuncia que la sentencia en su considerando décimo infringe el artículo 325 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 1545 del Código Civil, por lo que dicha infracción constituye otra infracción de ley de acuerdo con el artículo 477 del Código del Trabajo, cuando dispone que Enap es condenada al pago del bono variable desde el mes de julio de 2020 a marzo de 2022 y, proyecta dicho bono hacia el futuro sin límite alguno (“en lo sucesivo”), lo cual contraviene lo estipulado en el convenio colectivo, pues de la simple lectura de la cláusula vigésimo primera, el referido bono variable a que se refiere la demanda, contempla el pago de dicho bono solo hasta el mes de abril de 2020, correspondiente a la liquidación de los parámetros para su cálculo de los meses de enero, febrero y marzo de 2020, lo cual vulnera lo establecido en el artículo 1545 del Código Civil que dispone que todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes y no podrá ser invalidado sino por el consentimiento mutuo o por causas legales. Señala que el juez carece de facultades para extender la validez de las cláusulas de convenio colectivo más allá de su vigencia y estipulaciones expresamente contenidas en ella. Indica que esta infracción influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pues de haber acogido esta argumentación, debió necesariamente haber rechazado la demanda en cuanto a condenar a Enap a pagar este bono variable más allá del plazo convenido para su aplicación, lo que no pudo legalmente hacer por vulnerar el artículo 1545 del Código Civil, aplicando erradamente el efecto del artículo 325 del Código del Trabajo, al extender la aplicabilidad y efectos del bono variable a fechas y periodos que el contrato no contiene, por lo cual



no ha respetado la literalidad y contenido de la referida cláusula vigésima primera.

Por su parte, el abogado de la contraria, solicita el rechazo del recurso en cuanto a esta infracción, indicando que la sentencia hace una correcta aplicación de la ultraactividad contemplada en el artículo 325 del Código del Trabajo. Indica que acoger lo sostenido por el recurrente, implicaría una renuncia anticipada a la ultraactividad consagrada en el citado artículo 325, lo cual no sería sostenible, pues bastaría que en todas las cláusulas de los contratos colectivos se pusiera una fecha de término, para que una vez extinguido el contrato colectivo ninguna cláusula pudiera pasar a formar parte a los contratos individuales, con lo cual el artículo 325 del Código del Trabajo tendría nula aplicación, y sería letra muerta, con lo cual solicita el rechazo de este motivo de infracción de ley como causal de nulidad contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo.

DÉCIMO OCTAVO: La infracción antes indicada, que sostiene una vulneración de los citados artículos 325 del Código del Trabajo en relación con el artículo 1545 del Código Civil, debe ser analizada en concordancia con lo señalado para rechazar la infracción anterior, teniendo en consideración que de acuerdo con el efecto de ultraactividad de los contratos colectivos, una vez que estos cesan en su vigencia, sus cláusulas con las salvedades que el propio artículos 325 del Código del Trabajo contempla se entienden incorporadas al contrato individual, lo que la doctrina denomina como efecto imperativo o real del contrato colectivo (GAMONAL CONTRERAS, Sergio, Derecho Colectivo del Trabajo, p.315). Que en la misma línea que se ha venido razonando, se concuerda con lo razonado por el a quo, en cuando que aceptar la alegación del recurrente, que pretende limitar los efectos de la cláusula vigésima primera y, por ende restarle a esta efectos ultraactivos, implicaría aceptar que un derecho laboral de los trabajadores pueda ser renunciado previamente, lo cual es contrario al artículo 5 inciso segundo del Código del Trabajo, por lo que de acuerdo con lo que se ha indicado, debe descartarse infracción de ley en los términos del artículo 477 del Código del



Trabajo, referida a la aplicación del artículo 325 del Código del Trabajo en relación con el artículo 1545 del Código Civil.

DÉCIMO NOVENO: Que, a mayor abundamiento, para rechazarse la causal de infracción de ley contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo, además de la fundamentación antes esgrimidas, debe rechazarse la causal de nulidad por cuestiones de forma, pues no se indicó por el recurrente si cada una de las infracciones denunciadas como motivos de la causal de nulidad antes indicada, fueron deducidas de manera subsidiaria o conjunta. Es más, el petitorio de esta causal de nulidad no guarda relación con la segunda infracción denunciada, esto es que la acción deducida por el Sindicato lo fue por sujetos carentes de legitimación activa, pues se pide a este Tribunal únicamente una nulidad parcial, referida al reconocimiento y pago del bono variable, y no la nulidad de la totalidad de la sentencia, como debió ocurrir para el caso de acogerse la falta de legitimación activa del sindicato, razón por la cual, además de todo lo argumentado, y teniendo presente que el recurso de nulidad es un medio de impugnación de carácter extraordinario, y de derecho estricto, en donde la competencia de esta Corte respecto del recurso está dada por las peticiones que formule el recurrente de conformidad con la ley, no resulta posible acoger la causal de nulidad sin que se indique la forma en cómo se deducen cada uno de los motivos de infracción legal que configuran la causal de nulidad del artículo 477 del Código del Trabajo, y más aun teniendo en consideración que la petición referida a la falta de legitimación activa, no guarda relación con el efecto de dicha excepción produce respecto de la totalidad de la sentencia impugnada, por lo que el petitorio de la causal no guarda relación con una de las infracciones denunciadas a través del recurso, razón por la cual debe rechazarse también la presente causal del recurso contenida en el artículo 477 del Código del Trabajo.

VIGÉSIMO: Que por todo lo que se ha razonado se desestimaré el recurso de nulidad interpuesto por la demandada ENAP REFINERÍAS S.A. en estos autos.



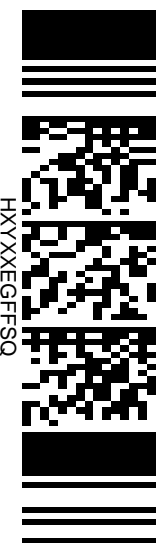
Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 5, 220 N°2, 311, 325, 432, 453, 477, 478 letra f) del Código del Trabajo, artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, y demás normas legales que resulten aplicables, se declara que **SE RECHAZA, sin costas**, el recurso de nulidad deducido por ENAP REFINERÍAS S.A., en contra de la sentencia de 5 de diciembre de 2022, dictada por el Juez Rodrigo Vera García, Juez del Juzgado de Letras de Concepción, la cual en consecuencia, no es nula.

Redacción del abogado integrante: Humberto Andrés Alarcón Corsi.

Notifíquese, regístrese y devuélvase.

No firma la ministra suplente señora Margarita Sanhueza Núñez, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.

Rol 899-2022 laboral-cobranza.



Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción integrada por Ministras Valentina Salvo O., suplente Margarita Sanhueza N. y Abogado Integrante Humberto Andres Alarcon C. Concepcion, diez de abril de dos mil veintitrés.

En Concepcion, a diez de abril de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

